*El paramilitarismo en tiempo presente. Hacia una caracterización de las formas actuales del mercenarismo contrainsurgente**



Volver al Índice
Haz Clic.
Descargar Artículo
Haz Clic.

Francisco Javier Toloza
Docente Universidad Nacional de Colombia

El presente artículo forma parte de la contribución del autor al libro colectivo* **Paramilitarismo del siglo XXI, *publicado recientemente por ILSA y la Asociación Jorge Freytter Romero. https://ilsa.org.co/2026/08/paramilitarismo-siglo-xxi/*

La continuación de la confrontación armada en Colombia se ha convertido en un requerimiento tanto del bloque de poder como de la estrategia imperial norteamericana. Mientras persista el conflicto sociopolítico y armado en el país, no se avistan señales ni razones para que el orden contrainsurgente imperante desista del recurso al mercenarismo corporativo, como lo ha hecho históricamente. Por el contrario, las tendencias actuales hacia la irregularización y la tercerización de la guerra conllevan una potenciación de sus formas tradicionales y emergentes.

Tras el paro armado que asoló la Costa Caribe hace unas semanas y el fracaso de todas las mesas de diálogo en el marco de la fracasada política de paz del gobierno de Petro, la continuidad del paramilitarismo es una realidad palmaria. El debate debería centrarse en su caracterización actual, sus persistencias e innovaciones, más que en su existencia y en los eufemismos que cíclicamente se inventan para negar el carácter de mercenarismo contrainsurgente[1] de estos grupos armados.

El paramilitarismo en Colombia ha constituido una práctica sistémica que ha mutado de manera constante, sin perder los elementos esenciales que lo hacen funcional al orden contrainsurgente. Tras la desaparición de la sigla AUC, hoy se presentan cinco tipos de mercenarismo corporativo contrainsurgente, algunos aún en fase de maduración, que continúan una guerra contra el pueblo. No se trata de una tipología exhaustiva, aunque pretende ser representativa. Más que un epíteto de orden moral o ideológico, se busca identificar el interrelacionamiento de estas formas contemporáneas de concesión del uso de la violencia a privados, en salvaguarda de intereses del orden contrainsurgente, con la tradición del mercenarismo corporativo paramilitar, más allá del nivel de licitud formal, escala bélica, grado de desarrollo, tipo de estructura o implicación criminal de los tipos descritos.

a) Continuidad neoparamilitar

Esta primera tipología corresponde a las organizaciones neoparamilitares cuyo origen se remonta a las antiguas AUC y que mantienen una estructura mercenaria ilegal resistente tras más de dos décadas; pese a sus constantes readecuaciones organizacionales, conservan formas de operación muy similares a la contrainsurgencia privada tradicional en el país. Sus ejemplos más notorios son los autodenominados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), así como las redes paramilitares La Cordillera o La Inmaculada. Ninguna de ellas constituye una estructura "pura", sino que se presenta entremezclada en el marco de una difusa telaraña de pie de fuerza propio y de articulaciones con grupos descentralizados de diverso tipo. Todas estas estructuras desarrollan control territorial, incidencia electoral, cobran tributos a la población, configuran trusts de negocios legales e ilegales y garantizan la acumulación por despojo. No se han mantenido durante estas décadas por "ausencia de Estado", sino gracias al mito de su ausencia, en términos de Margarita Serje.[2]

Aunque las aproximaciones en el marco de la guerra tienden a ser imprecisas, el informe de PARES (2025) identifica la presencia del Clan del Golfo o EGC en más de 300 municipios y 17 departamentos. Se trata hoy del mayor grupo paramilitar y del único con proyección nacional. Según la FIP (2026), su número de integrantes creció un 30 % durante 2025, hasta alcanzar cerca de 10.000, lo que lo convierte en el grupo armado ilegal más numeroso del país. Su frontera territorial se extiende desde la zona de confrontación con el ELN en el Bajo Calima y el Chocó hasta el área de disputa con Los Pachenca en Magdalena, sin detrimento de sus incursiones hacia el Catatumbo. El llamado EGC es heredero de la histórica cepa "urabeña" de las AUC, de la que absorbió mandos, redes, aprendizajes y contactos. Uno de sus principales rasgos ha sido la diversificación de sus

[1.] Se toma esta categoría del trabajo de Vilma Franco, *Orden Contrainsurgente y dominación* (2009): "La forma de articulación de diferentes redes y centros de poder al bloque de poder contrainsurgente favoreció, en el caso colombiano, que ese proceso de organización militar de los civiles se descentralizara y diera lugar a la formación de una estructura armada ilegal con autonomía relativa y un acento mercenario: después de una organización centralizada por la jerarquía militar acogió rápidamente una descentralización que redefinió la organización paramilitar como mercenarismo corporativo contrainsurgente".

[2.] SERJE, Margarita. *El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las "zonas de frontera" en Colombia*. 2012.



economías, que abarcan desde el control del tráfico de migrantes por el Darién y la provisión de bienes y servicios hasta la regulación de los precios del oro, además de su capacidad de combate y de absorción de facciones rivales.

En segundo lugar, estaría el grupo de Los Pachenca, autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), sucesores directos del depredador sexual Hernán Giraldo, alias *Taladro* o *El Viejo*, y sus estructuras paramilitares, que se remontan a Los Chamizos y al llamado Bloque Tayrona de las AUC. Este grupo desarrolla duros enfrentamientos territoriales con su congénere, el EGC, especialmente por el control de la Sierra Nevada de Santa Marta y la desembocadura del río Magdalena, pero continúa su expansión hacia la frontera colombo-venezolana, a través del departamento del Cesar, en busca de una salida hacia el Catatumbo. Durante el gobierno de ADLE, ha estado en el centro del debate público, no solo por su demostración de control territorial en el reciente paro armado, sino también por la intervención de fuerzas estatales tanto en su disputa con el Clan del Golfo como en sus reacomodos internos, como quedó evidenciado en el caso de la muerte de *Bendito Menor*.[3]

b) Outsourcing paramilitar urbano

Siguiendo la tradición de las AUC de penetración en las zonas urbanas, en asociación con estructuras de delincuencia común, la actual fase del neoparamilitarismo ha profundizado esta práctica hasta tal punto que se aprecia una transformación cualitativa de los actores. No se trata de una subordinación-integración nítida, como la que se produjo con la creación del Frente Fronteras en Cúcuta, el Cacique Nutibara en Medellín o el Bloque Capital en Bogotá. Se garantiza la autonomía de las bandas locales, que adquieren una mayor correlación de fuerzas en su asociación con las grandes estructuras paramilitares, pero también un marcado carácter contrainsurgente y una potencia militar *in crescendo*. Se rompe así el modelo de franquicia utilizado por estructuras como Los Rastrojos y se configura un auténtico *outsourcing* paramilitar urbano, tan criminal como efectivo para el control político-territorial.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=LBtDfeHKIzE

Al mismo tiempo que la idea de grandes ejércitos paramilitares se reduce, empiezan a consolidarse múltiples estructuras urbanas, apalancadas en la tercerización criminal y contrainsurgente. Los Costeños y Los Pepes, en Barranquilla; Los Shotas y Los Espartanos, en Buenaventura; Los Mexicanos, Los Locos Yam, Revolución Cabí y Los Simpsons, en Quibdó; Los Pachely, La Terraza y La Oficina, en el Valle de Aburrá, por mencionar solo aquellas bandas que obtuvieron reconocimiento para participar en diálogos denominados sociojurídicos con el gobierno de Petro, pueden ejemplificar esta nueva modalidad paramilitar, al igual que la amplia red de grupos que se articulan en La Cordillera.

Estas bandas de contrainsurgencia urbana arraigan su origen en las AUC, los ejércitos paramilitares de los carteles del narcotráfico y sus amplias redes de apoyo. Sus liderazgos provienen del paramilitarismo, su aparición se origina en los mismos grupos neoparamilitares, y sus dinámicas de acumulación por despojo fueron cedidas en el marco de la reingeniería contrainsurgente tras la desmovilización de las AUC. Así, por ejemplo, tanto Los Costeños como Los Pepes, tienen como tronco común una estructura delincuencial fundada por desmovilizados de las AUC –los hermanos Borré Barreto– que compraron la franquicia del grupo paramilitar de Los Rastrojos. Shotas y Espartanos, comparten el mismo origen: desmovilizados del Bloque Calima de las AUC fundan una estructura narcoparamilitar llamada La Local de la que surgirán las dos bandas rivales de la actualidad. En el caso de La Oficina, que articula 13 bandas del Valle de Aburrá, también son nítidas sus raíces en el Cartel de Medellín y en la estructura paramilitar de *Don Berna*. La Cordillera, por su parte, es heredera del Bloque Central Bolívar y de las estructuras de microtráfico vinculadas al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias *Macaco*. No se trata simplemente de hampa o delincuencia común, sino de una reestructuración del mercado criminal colombiano desde el paramilitarismo.

En estas estructuras urbanas neoparamilitares se aprecian varias constantes: la articulación flexible con el EGC u otros grupos de mercenarismo contrainsurgente de mayor calado; la conexión con redes y mafias ilícitas transnacionales a su vez intervenidas por la DEA norteamericana; reciclaje de repertorios de control paramilitar que va desde los cobros a todo tipo de actividad económica hasta la administración del miedo con prácticas como las "casas de pique"; pugnacidad constante entre sí y maleabilidad en alianzas externas; y, obviamente, la profunda penetración de la institucionalidad, las economías lícitas y la política a nivel local. Estas expresiones de paramilitarismo urbano, pese a matizar hoy su cariz ideológico, son herederas directas de la experiencia de la "donbernabilidad" y su poder territorial es claramente funcional al orden contrainsurgente imperante, convirtiéndose en formas más dúctiles del modelo de mercenarismo corporativo, adaptado a la ciudad.

C) Mercenarización exacerbada

Ceceña[4] considera que la revolución en los asuntos militares contemporáneos responde a la necesidad de transgredir los límites institucionales impuestos y se traduce en lo que denomina *mercenarización exacerbada*: el uso de fuerzas privadas que, soterradamente, se ocupan de todo el trabajo sucio de la guerra: capturas, ejecuciones, desestabilización, ajustes de cuentas y demás, sin ningún tipo de control social. En este marco se incluyen desde Blackwater –hoy Constellis– hasta los comandos cazarrecompensas activados por la justicia norteamericana. Si bien el mercenarismo "legal" fue utilizado en la guerra en Colombia desde la década de 1980, su peso en el desarrollo de la confrontación ha dado importantes saltos cualitativos. Luego del Plan Colombia, el desarme de las FARC-EP y la incorporación del país como socio global de la OTAN, se presentan nuevos rasgos de la constante mercenaria del orden contrainsurgente, que vienen a complementar la ya tradicional presencia y operación de las compañías militares privadas.

En primer lugar, la permisividad de incursión y operación de mercenarios transnacionales dentro y desde Colombia. Se pasó de la contratación estatal o privada de estas compañías, a su actuación de oficio en el territorio nacional, independientemente de dónde están sus objetivos operacionales. Vega[5] de-

[4] CECEÑA, Ana Esther. *Las guerras del siglo XXI*. 2020

[5] VEGA, Renán. *Injerencia consentida de Estados Unidos y contrainsurgencia en el nuevo ciclo de guerra en Colombia*. 2024.

La continuación de la confrontación armada en Colombia se ha convertido en un requerimiento tanto del bloque de poder como de la estrategia imperial norteamericana. Mientras persista el conflicto sociopolítico y armado en el país, no se avistan señales ni razones para que el orden contrainsurgente imperante desista del recurso al mercenarismo corporativo, como lo ha hecho históricamente. Por el contrario, las tendencias actuales hacia la irregularización y la tercerización de la guerra conllevan una potenciación de sus formas tradicionales y emergentes.

nuncia que la política de recompensas por asesinar o capturar a enemigos militares o políticos de Colombia o de Estados Unidos ha impulsado la industria mercenaria. Se presencia un nuevo *Wild West*, en el que comandos provenientes de cualquier lugar del mundo pueden cazar objetivos y cobrar recompensas con la venia del Estado colombiano, siempre que estos no correspondan a aliados del orden contrainsurgente. Las acciones desarrolladas desde Colombia por el militar golpista venezolano y testigo de la DEA Cliver Alcalá, en relación con la empresa norteamericana Silvercorp, así como la creciente presencia de personal de seguridad israelí en el país, resultan elocuentes respecto del nuevo teatro de guerra abierta y transfronteriza activado por la actual fase de mercenarización exacerbada.

En segundo lugar, una forma actualmente presente del paramilitarismo colombiano ya no es solo la importación de mercenarios, sino también su exportación, obviamente dentro de la órbita geopolítica norteamericana. El fenómeno que irrumpió con el proceso de tercerización de las guerras imperiales tiende a profundizarse ante la desaparición de las FARC-EP y la constante producción de un ejército de reserva por parte de un complejo de guerra desproporcionado, desarrollado durante el prolongado conflicto armado. Cada año se licencian batallones completos de oficiales, suboficiales y soldados aún en condiciones de servicio que, gracias a la inexistencia de regulaciones estrictas, son reclutados no por el "mejor postor", sino por estructuras mercenarias contrainsurgentes transnacionales. Las tropas mercenarias colombianas no van a combatir a cualquier parte, sino a conflictos y bandos de interés geopolítico imperial. No se verá a combatientes nacionales con los hutíes, el Frente Polisario o las guerrillas filipinas, pero sí junto a los paramilitares del régimen de Sudán del Sur, el ejército sionista en Gaza, las fuerzas mercenarias ucranianas en el Donbás, en decenas de compañías militares privadas de las monarquías árabes y hasta en operaciones de sicariato internacional, como el rapto y asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, o en acciones de los carteles mexicanos.[6] Las consecuencias culturales de este mercenarismo contrainsurgente transnacional redundan en las dinámicas de la confrontación armada en Colombia y la región. La reciente promulgación de la Ley 2569 de 2026, mediante la cual se aprueba la Convención de la ONU contra el mercenarismo de 1989, más que un correctivo eficaz, resulta sintomática de la problemática y de la ausencia de una legislación actualizada, ya que la normativa se refiere esencialmente a mercenarios individuales contratados por partes estatales en conflicto, más que a la compleja intermediación de consorcios militares privados mimetizados en el mercado de la seguridad.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios para violar los derechos humanos, encabezado por su Presidenta-Relatora, Michell Small, realizó visita oficial a Colombia para incluirla

6. https://revistaraya.com/exclusivo-112-colombianos-han-participado-del-genocidio-en-gaza.html
https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yx1epj9x4o
https://elpais.com/america-colombia/2024-12-22/colombia-el-gran-exportador-de-mercenarios-en-el-mundo-no-somos-terroristas.html

Con el actual auge de estas tendencias políticas a nivel global y el histórico arraigo de estas prácticas en la derecha colombiana, se atisban nuevas dinámicas violentas desde sectores paramilitarizados de la sociedad civil. La retórica intolerante, de incitación de odio que raya en la instigación al delito, es hoy común en las redes sociales y los medios colombianos. Cuenta con ingentes apoyos económicos del lobby guerrerista, así como con la clara contribución de varias facciones de clase ligadas históricamente con el mercenarismo corporativo contrainsurgente.

en el informe de 2026. Según este organismo de la ONU, más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en diferentes guerras alrededor del mundo, en su mayoría exmilitares o exintegrantes de las fuerzas de seguridad, quienes figuran entre los más demandados a nivel global para desempeñar funciones de combate o seguridad privada: "Se les puede encontrar en la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania o Yemen. También son contratados para participar en operaciones de crimen organizado especialmente en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos".[7]

Estas dinámicas novedosas de mercenarismo tienden a retroalimentarse entre sí y con formas mercenarias más tradicionales ligadas al sector de la seguridad, generando una suerte de puerta giratoria del personal formado para estas funciones y redundando, por demás, en el fortalecimiento de corporaciones, equipamientos y referentes culturales claves para el orden contrainsurgente imperante. En todos los casos, hay participación directa del complejo militar-económico dependiente generado en Colombia y, en alguna proporción, de complejos militares-industriales de EE. UU., de socios de la OTAN o del Estado de Israel, que se articulan en este mercado transnacionalizado de carne de cañón.

d) El retorno del bandolerismo contrainsurgente

Como se ha expuesto anteriormente, la extensa guerra en Colombia ha presenciado cambios de bando individuales, confrontaciones armadas entre grupos del mismo cariz y la funcionalización de estructuras armadas, independientemente de su origen –o de la conciencia que tengan de este–, para el accionar contrainsurgente. Experimentos como el del bandolerismo tardío o bandolerismo oficialista de "Los Limpios", dirigido contra antiguos integrantes de las autodefensas campesinas comunistas, o la transfiguración del EPL en Urabá, cuya absorción en las ACCU fue clave en el genocidio de la UP, constituyen algunos antecedentes de esta práctica del orden contrainsurgente.

No es, por tanto, un disparate concebir que, independientemente de la conciencia para sí o del autorreconocimiento, vuelvan a ordenarse funcionalmente, dentro de la estrategia contrainsurgente, acciones, prácticas, mandos y estructuras de grupos armados que tuvieron su origen en la rebelión. Más allá del debate judicial sobre quién infiltra o utiliza a quién, se evidencian trayectorias convergentes y funcionales al orden contrainsurgente, que otorgan beneficios operacionales a grupos o comandantes específicos en su confrontación con los grupos guerrilleros a los que se enfrentan.

Sin duda, los casos más conspicuos corresponden a la denominada "disidencia" de alias *Antonio Medina* en Arauca y Casanare, que atacó al unísono a otras guerrillas, a la población civil y a las fuerzas oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, y que contó con apoyo de mandos militares colombianos para sus operaciones.[8] Las políticas de desplazamiento forzado contra comunidades y pueblos indígenas en el Cauca por parte de los grupos llamados disidentes,

7. https://www.dw.com/es/onu-10000-colombianos-han-sido-reclutados-como-mercenarios/a-76573669

8. https://caracol.com.co/2025/08/18/soldados-del-ejercito-habrian-transportado-guerrilleros-y-les-gastaron-cerveza/
https://revistaraya.com/estan-infiltradas-las-disidencias-por-el-ejercito.html

las amenazas masivas contra el movimiento campesino en históricas regiones agrarias o la participación de dichos grupos en el genocidio político contra firmantes del Acuerdo de Paz y liderazgos sociales de los territorios bien podrían también dar cuenta de esta situación. La connivencia con sectores de las FF. MM. y con redes transnacionales criminales intervenidas por la DEA llevaría no solo a evidenciar, sino también a fortalecer esta tendencia hacia lo que podría configurarse como una nueva forma de bandolerismo contrainsurgente, expresión renovada del mercenarismo paramilitar, en cuanto implica la utilización de la guerra irregular para intereses corporativos y objetivos claramente contrainsurgentes.

e) "Fasci di combattimento" para el siglo XXI

La movilización violenta de civiles es el rasgo distintivo de la política fascista. Duverger (1957) afirmaba que la milicia es a los partidos fascistas lo que la célula a los partidos comunistas:

> Los partidos fascistas crearon verdaderos ejércitos políticos, milicias privadas capaces de apoderarse del Estado por la fuerza y de servirle luego de guardia pretoriana…la milicia es una creación fascista. Corresponde, en primer lugar, a la doctrina del fascismo, a esa mezcla de Sorel, de Maurras y de Pareto, que afirma el predominio de las élites, de las minorías actuantes, y la necesidad de la violencia para permitirles conquistar y conservar el poder: la milicia organiza esas minorías y les da los medios de acción violenta.

Desde los "haces de combate" de Mussolini, hace un siglo, hasta los grupos paramilitares norteamericanos de la actualidad, estas expresiones forman parte de un rasgo inherente a la extrema derecha. Su grado de violencia o capacidad de destrucción es otro debate. Como en el periodo de entreguerras del siglo XX, en medio de la profundización de la crisis capitalista, emergen en varios países proyectos de inspiración fascista, con mayor o menor maquillaje, que retoman relatos y acciones virulentas contra gobiernos de izquierda, ideologías y grupos sociales a los que tachan de amenaza. El ascenso de la derecha europea antiderechos de Le Pen, Meloni, AfD o Vox; la consolidación de grupos paramilitares como Svoboda o Sector Derecho en la política legal de Ucrania; o la irrupción de auténticas sectas políticas virtuales de extrema derecha, como los *groypers* o los *incels*, denotan el retorno del encuadramiento y la movilización violenta de civiles inspirados en discursos de odio.

Con el actual auge de estas tendencias políticas a nivel global y el histórico arraigo de estas prácticas en la derecha colombiana, se atisban nuevas dinámicas violentas desde sectores paramilitarizados de la sociedad civil. La retórica intolerante, de incitación de odio que raya en la instigación al delito, es hoy común en las redes sociales y los medios colombianos. Cuenta con ingentes apoyos económicos del l*obby* guerrerista, así como con la clara contribución de varias facciones de clase ligadas históricamente con el mercenarismo corporativo contrainsurgente.



Más allá de su dispersión político-electoral, son varios los grupos neonazis vinculados a partidos de la derecha colombiana, al igual que es cada vez más común que estas agrupaciones legales y sus dirigentes cuenten con brigadas de choque para la acción violenta, que va desde el sabotaje a propaganda, monumentos o sedes políticas hasta el enfrentamiento directo con ciertas movilizaciones sociales. En pleno siglo XXI ya no se requiere una estructura partidista unificada como en el fascismo clásico, ni un centro que emita órdenes, sino señales orientadoras que aúpen la acción virulenta de ciudadanos fuertemente ideologizados. Si bien, obviamente, no se trata de escuadrones paramilitares del calado de las AUC, tampoco corresponden a simples estructuras de agitación legal u opiniones espontáneas. Casos como el de los concejales del partido Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez, alias *El Gury*, de la ciudad de Medellín, o Andrés Escobar, de la ciudad de Cali, bien pueden dar cuenta del resurgimiento de esta modalidad de patota falangista que se enraíza en el conservadurismo colombiano.[9] Cabe resaltar que, como en sus precedentes históricos, el orden jurídico existente tiende a ser permisivo con estas dinámicas violentas, que terminan amparándose en la flexibilización del porte de armas, que el actual gobierno propone ampliar, y en el concepto de "legítima defensa privilegiada", consagrados en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022).

No es menor la preocupación por la búsqueda, desde los partidos de derecha, de incorporar a militares en retiro a sus estructuras y movilizar a los reservistas, muy a tono con el auge del complejo militar-económico. En especial durante el último cuatrienio, se intensificaron las marchas y protestas de exmilitares y sus allegados en contra de todo tipo de políticas del gobierno de Petro, en un claro síntoma de una agenda que supera las reivindicaciones gremiales y se acerca más a la defensa del orden contrainsurgente imperante.[10] Si bien dicha práctica no se ha traducido, hasta ahora, en un innecesario "ruido de sables", sí le ha permitido a la ultraderecha, además de fortalecer sus brigadas de choque, acceder a información de seguridad nacional, tener resonancia entre las tropas activas y, en ocasiones, atacar directamente concentraciones y propaganda política de organizaciones sociales o de izquierda, como ocurrió incluso en la Universidad Nacional de Bogotá.

Otra veta inagotable de análisis sobre el nuevo accionar de estructuras fascistoides tiene que ver con su papel en la guerra híbrida, particularmente en las dimensiones comunicativas y psicológicas, donde la clásica labor goebbeliana de desinformación se potencia y simplifica gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías. El mundo digital es un campo fértil para prácticas de violencia simbólica que cobran sentido como sustentadoras de la eliminación física y moral de los contradictores del orden contrainsurgente, por lo que podrían entenderse dentro de la acción integral político-militar de estos grupos, base de la ultraderecha. El desarrollo en Colombia de estas formas larvadas de ciberfalanges o "Camisas Pardas" para el siglo XXI es aún incierto, así como su articulación con las otras formas presentes de mercenarismo corporativo, en medio de la agudización de la disputa por el rumbo político del país y la región.

9. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/el-que-le-disparo-a-manifestantes-en-cali-ahora-es-concejal/
https://www.elcolombiano.com/medellin/criticas-concejal-medellin-amenaza-bate-GD29803423
10. https://www.youtube.com/watch?v=D3Mn0J4O2N0
https://www.radionacional.co/actualidad/protestas-militares-retirados-hoy-en-bogota-plaza-de-bolivar